Acción de tutela No. 110013103 025 2023 00127 00

Resuelve el juzgado la acción de tutela formulada por PABLO NARANJO GALEANO contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, previo los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. El señor Naranjo Galeano promovió acción de tutela en contra de la Unidad de Víctimas implorando la protección de sus derechos fundamentales de petición, mínimo vital e igualdad. En consecuencia, solicitó: “(...) *Ordenar A la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Contestar el DERECHO DE PETICIÓN de forma y de fondo (sic). Ordenar a la unidad especial para atención y reparación integral a las víctimas que brinden el acompañamiento y recursos necesarios para lograr que nuestro estado de vulnerabilidad sea superado y podamos llegar a un estado de auto sostenibilidad como lo expresa la legislación existente. Ordenar a UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS conceder el derecho el derecho (sic) a la igualdad, al mínimo vital y cumplir lo ordenado en la T-025 de 2.004. Sin turnos, asignando mi mínimo vital con ayuda humanitaria de manera inmediata y una nueva valoración del PAARI y medición de carencias para que se continúe otorgando la atención humanitaria. Ordenar a UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS contestar el derecho de petición manifestando una fecha cierta de cuándo se va a conceder la ayuda (...)*”.

1.2. Como fundamentos fácticos relevantes expuso, en resumen, que, el día 3 de febrero del año en curso presentó un derecho de petición ante la accionada, solicitando una nueva valoración del PAARI y medición de carencias para que se continúe otorgando la atención humanitaria, sin embargo, a la fecha no ha sido posible obtener una respuesta de fondo a su solicitud.

Adujo que, la accionada evade su responsabilidad expidiendo una resolución en la que manifiesta que su estado de vulnerabilidad ha sido superado, cuando en realidad ello no ha sido posible por la ausencia de acompañamiento y apoyo necesario para contar con un proyecto productivo sostenible que le permita generar sus propios ingresos; además no cuenta con una vivienda digna, encontrándose en estado de vulnerabilidad, por tal razón cumple los requisitos que ha previsto la jurisprudencia y la legislación para acceder a las ayudas humanitarias.

Arguyó que, el sistema de evaluación del PAARI es ineficaz por cuanto no determina verdaderamente el estado de vulnerabilidad y viabilidad de cada persona, pues la única forma que constataría esa situación es la inspección a

domicilio.

1.3. Asumido el conocimiento de la presente causa por parte de este Estrado Judicial, se dispuso oficiar a la accionada, a fin de que rindiera un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela; así mismo, remitiera copia de la documentación que para el caso en concreto correspondiera.

1.3.1. LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, manifestó en síntesis que, realizó el proceso de identificación de carencias al accionante y su núcleo familiar, por tanto, mediante resolución No. 0600120171768123 de 2017 dispuso la suspensión de la entrega de la atención humanitaria. Decisión contra la cual se presentó solicitud de revocatoria directa, la cual se resolvió desfavorablemente mediante resolución No. 20211270 del 29 de enero de 2021.

Por lo anterior, considera que se atendió suficientemente la solicitud aquí deprecada, configurándose así el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.

Finalmente, arguyó que, el actor con anterioridad a la presente acción promovió una similar por los mismos hechos y pretensiones, la cual fue conocida por el Juzgado 8 Familia de Bogotá bajo el radicado No. 2022-00788, lo que de suyo conlleva una acción temeraria.

2. CONSIDERACIONES

2.1. La Constitución Política en su artículo 86 estableció la acción de tutela, con el objeto de que toda persona pueda reclamar en todo tiempo y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en casos excepcionales.

2.2. El presente trámite constitucional se inició principalmente por la presunta vulneración al derecho de petición. El artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el canon 1º de la Ley 1755 de 2015 *-por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-*, y el cual se acompaña con lo previsto en la norma 23 Superior, lo ha definido como el que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, con miras a obtener una pronta resolución, advirtiéndose, además, por

vía jurisprudencial que a diferencia de los términos o procedimientos judiciales, esta protección fundamental es una vía expedita de acceso directo a las autoridades, y aunque su objetivo no incluye la exigencia de una resolución en un sentido determinado, sí intima para que exista un pronunciamiento oportuno y concreto frente a la reclamación que se invoca.

Por otro lado, conforme lo establece el artículo 14 del CPACA, modificado por la citada Ley, salvo norma especial, las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Asimismo, y conforme al párrafo de dicho canon normativo, en caso de no resolverse la petición dentro del lapso citado *"la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado (...) expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo en que se resolverá o dará repuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto"*.

Adicional a lo anterior, recuerda esta judicatura que, conforme a los lineamientos antes expuestos, el término de 15 días con que originalmente contaban las entidades, para resolver la petición formulada, dicho plazo fue ampliado conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020¹, expedido por el Gobierno Nacional con ocasión al estado de emergencia sanitaria decretado, por lo que el estudio de las peticiones causa de la acción de amparo debían responderse dentro del término de 30 días. Posteriormente, mediante la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, se derogó el precepto 5º antes mencionado, por lo que, a partir del día siguiente de la promulgación de esa norma, el término para resolver las peticiones volvió a ser de 15 días.

2.3. Respecto al derecho de petición y protección reforzada de personas en situación de desplazamiento.

La H. Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos ha resaltado que la obligación de garantizar el derecho de petición adquiere gran relevancia cuando son presentados por víctimas del desplazamiento forzado, más aún si las solicitudes se encuentran encaminadas a conceder la atención y reparación, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional.

En sentencia T- 839 de 2006, definió los criterios que deben respetar y seguir todas las entidades competentes para resolver ese tipo de

¹ Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción (...).

peticiones, estos son: “i) incorporar la solicitud en la lista de desplazados peticionarios; ii) informarle a la víctima de desplazamiento forzado dentro del término de quince (15) días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; iii) informarle dentro del mismo término si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; iv) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, tendrá que adelantar los trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; v) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, procederá a informar cuándo se hará realidad el beneficio y el procedimiento que se seguirá para que sea efectivamente recibido. Indicando, de igual forma, que la autoridad encargada no se encuentra en la posibilidad de exigir una orden procedente de un fallo de tutela para garantizar los derechos de estos sujetos y abstenerse de cumplir sus deberes”.

Así, la Corte ha considerado que la adecuada atención a las peticiones presentadas por los desplazados hace parte de “aquel mínimo de protección que debe recibir quien pertenece a esta población. En esa medida, las autoridades encargadas de atender este tipo de peticiones deben tener en cuenta que el manejo de dicha información, lo que incluye su registro y control, resulta de suma importancia, en pro de una respuesta y comunicación efectiva con el peticionario, en estos casos, sujeto de especial protección constitucional”². Por dicho motivo, al peticionario se le debe garantizar una respuesta de fondo, que sea sustentada por un estudio juicioso y apropiado de lo que se haya solicitado.

2.4 En primer lugar, se precisa que, en el *sub lite* no se configuró el fenómeno de cosa juzgada constitucional, pues si bien existe una sentencia de tutela proferida el 29 de noviembre de 2022 por el Juzgado 8º de Familia de Bogotá D.C., que guarda correspondencia con las partes de la presente acción tuitiva, ésta tuvo lugar por la presunta omisión de la entidad accionada al no atender el derecho de petición presentado el 13 de octubre de 2022 bajo el radicado No. 2022-8383920-2, mientras que la acción que aquí nos ocupa se deriva de la falta de respuesta de un derecho de petición presentado con posterioridad a dicha decisión, esto es, el radicado bajo el No. 2023-0062135-2 del 3 de febrero del año avante, lo que revela que no fue objeto de estudio por parte de dicha autoridad judicial.

Precisado lo anterior y descendiendo al caso concreto, encuentra este juzgado que el accionante, presentó derecho de petición ante la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS el pasado 3 de febrero del año en curso, al que le fue asignado el radicado No. 2023-0062135-2, solicitando, en síntesis, el otorgamiento de la ayuda humanitaria de manera directa.

² Corte Constitucional, Sentencia T-254 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

En réplica, la entidad tutelada en el curso de la acción allegó copia de la respuesta dada a la anterior petición, mediante comunicación bajo el código Lex 7275379, en la que se lee, entre otras cosas, lo siguiente:

*“(...) Dando trámite a su solicitud mediante la cual solicita ayuda humanitaria le informamos que la misma fue atendida de acuerdo con la nueva estrategia implementada por la Unidad para las Víctimas denominada “medición de carencias, prevista en el Decreto 1084 de 2015, y Resolución 1645 de 2019 (...). En consecuencia, me permito informarle, que, respecto a la Atención Humanitaria, se da respuesta en **RESOLUCIÓN No. 0600120171768123 de 2017 notificada por aviso con fecha de fijación de 25 y desfijación de 31 de enero de 2018, por la cual se suspende la entrega de atención humanitaria.***

*Ahora, de acuerdo a la solicitud de revocatoria directa interpuesta se dio trámite en la **Resolución No. 20211270 del 29 de enero de 2021 notificada en fecha 02 de marzo de 2021 por la cual se resuelve NO REVOCAR la decisión proferida mediante RESOLUCIÓN No. 0600120171768123 de 2017.***

(...)

En consecuencia, no es procedente acceder a la pretensión de entrega de atención humanitaria...”.

Como se puede evidenciar de la anterior contrastación (petición-respuesta), lo pedido por el accionante y lo contestado por la accionada, permiten entrever que las solicitudes elevadas por el señor Pablo Naranjo, fueron resueltas materialmente, pues la Unidad de Víctimas explicó que no era posible la entrega de la atención humanitaria, en razón a qué la misma fue suspendida mediante acto administrativo que se encuentra debidamente ejecutoriado, por el cual se llevó a cabo el procedimiento de identificación de carencias previsto para tal fin, por tanto, se colige que la respuesta dada fue clara, precisa, suficiente y congruente.

Advierta el promotor que, el “*derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa*”. De ahí que, tan solo compete al juzgado verificar el contenido de la respuesta, indistintamente de que el sentido de la decisión sea favorable o no a los intereses del *petente*.

Ahora, en cuanto al requisito de notificación de la respuesta, el mismo se encuentra cumplido a cabalidad, pues la entidad accionada allegó constancia de entrega en la dirección electrónica informacionjudicial09@gmail.com, la cual coincide con la informada en el escrito de petición.

Por lo anterior, en el presente asunto, se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que, en el curso de la presente actuación, cesó la vulneración a los derechos fundamentales reclamados por el accionante, figura respecto de la cual, la Corte Constitucional, ha expresado:

“La jurisprudencia constitucional ha establecido que en caso de que al momento de fallar se advierta que la acción u omisión que dio origen a la pretensión de tutela ha cesado, el pronunciamiento del juez de tutela carece de objeto, pues la amenaza o vulneración de derechos fundamentales que antes se alegaba se torna inexistente. Por tanto, el operador judicial se encuentra ante la imposibilidad de emitir alguna orden en pro de proteger las garantías fundamentales que en principio se consideraron afectadas.

Lo anterior puede ocurrir en tres supuestos, a saber: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado, o (iii) cualquier otra situación que conduzca a que carezca de sentido la orden a dictar para satisfacer la pretensión de la solicitud de tutela.

Al referirse al hecho superado, el Tribunal ha indicado que es aquella situación que se presenta cuando durante el trámite de la tutela o de su revisión, cesa la vulneración o amenaza del derecho que se buscaba proteger con la solicitud de tutela como consecuencia de una actuación por parte del demandado. En consecuencia, el accionante, en principio, ya no tiene interés en la satisfacción de su pretensión pues la causa que motivó la solicitud de tutela ha desaparecido”³

2.5. Finalmente, sobre el derecho a la igualdad, la Corte Constitucional tiene dicho que esta garantía superior *“comprende (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes”⁴*. En este caso, el promotor de la acción no menciona situaciones o circunstancias específicas que, en su caso, permitan avizorar la transgresión de este derecho fundamental por parte de la Unidad accionada, por lo que, ninguna protección podría dispensarse en tal sentido.

3. CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, se tiene que, ante la respuesta emitida y notificada al accionante por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, frente a su derecho de petición del 3 de febrero del año avante, se superó el objeto de la acción aquí interpuesta, por lo

³ Corte Constitucional, sentencia SU453 de 2020.

⁴ Corte Constitucional, sentencia T-068 de 2019

que se negará la protección solicitada al resultar inane cualquier orden que se pueda dar al respecto.

4. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

Con fundamento y apoyo en lo dicho, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

4.1. NEGAR el amparo solicitado por PABLO NARANJO GALEANO contra UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por carencia actual de objeto, por hecho superado, conforme se expuso en la parte motiva de esta decisión.

4.2. Notificar este fallo conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4.3. Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

Cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

L.S.S.

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6b93f2e213a5f9b50893bd31392c40e53d71d909cfb2fe7149bfd255a0e47a17**

Documento generado en 22/03/2023 12:27:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>